

## **Déficit de Credibilidad**

- ★ En Materia de Información Somos aún del III Mundo
- ★ Vacío que se Llena con Especulaciones y Rumores
- ★ Inevitable, la Tendencia a Ocultar y Distorsionar

**LORENZO MEYER**

Cuando en México ocurre algo inesperado y con implicaciones políticas, es común que la información y las explicaciones oficiales resulten insuficientes y que el vacío se llene con especulaciones y rumores: expresiones de incredulidad frente a la verdad oficial.

Ejemplos de lo anterior abundan; hoy destacan cuatro: a) el informe gubernamental sobre las causas de la explosión que tuvo lugar en Guadalajara el año pasado, b) la demanda presentada en Inglaterra por Kaveh Moussavi contra el ex secretario de Comunicaciones y Transporte, Andrés Caso Lombardo; c) las recientes acciones del ejército en Chiapas, y, desde luego, ch) el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y otras seis personas en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el 24 del mes pasado.

# Déficit de Credibilidad

Según de la primera plana

Es posible que los déficit más importantes que se tienen en México no sean con el exterior (alrededor de veinte mil millones anuales), sino internos. Y entre ellos, el de credibilidad.

Giovanni Sartori, en su *Revisión de la teoría democrática* (The Theory of Democracy Revisited), señala: "En sí mismo, el poder electoral es la garantía mecánica de la democracia, pero la garantía sustantiva de esa democracia se encuentra en las condiciones bajo las cuales el ciudadano recibe la información y queda expuesto a la acción de los formadores de opinión" (Chatham House, 1987, pp. 86-87). Desde esta perspectiva, es claro que en México hay déficit... tanto por lo que toca a las garantías mecánicas como a las sustantivas de la democracia. En nuestro país aún no son creíbles —no son dignas de confianza— las elecciones ni una buena parte de la información política.

El problema de la credibilidad gubernamental es viejo pero se renueva sexualmente. Como bien se sabe, el gobierno actual se inició con un problema de credibilidad en materia electoral. Según una encuesta publicada por el diario *Los Angeles Times* en 1988, setenta y tres por ciento de los mexicanos entrevistados entonces dudaban de la veracidad de los resultados oficiales de las elecciones de 1988. Pues bien, el sexenio corre el peligro de terminar donde empezó en esta materia.

Ningún gobierno en ninguna parte del mundo ofrece a los gobernados, de manera voluntaria y automática, toda la información necesaria sobre temas que se consideran delicados. Aun en las sociedades más democráticas y abiertas, las autoridades no vacilan en controlar el flujo de información que se da al público. La razón es tan sencilla como contundente: en cualquier sistema político, el compromiso fundamental de quienes ejercen el poder no ha sido, es o será, con la verdad, sino con el poder mismo. Hace ya varios siglos que Maquiavelo dejó en claro que el objetivo central del príncipe, es la preservación e incremento de su poder, y que cuando la verdad se contrapone a ese objetivo, la verdad pierde. De ahí la tendencia de todos los gobiernos a mantener cierta información en secreto, a informar selectivamente o, de plano, a desinformar, a mentir. En resumen, la manipulación de la información es siempre y en todo lugar, parte de las técnicas de gobierno.

Ahora bien, si todos los gobiernos tienden a esconder, controlar e incluso falsear información, no todos lo hacen o pueden hacerlo de la misma forma y con el mismo éxito. En un extremo están los gobiernos totalitarios, al estilo la Alemania nacionalsocialista o la antigua Unión Soviética y, en el otro, las sociedades abiertas, donde la pluralidad política y la división formal y efectiva del poder, permite la multiplicidad de fuentes y canales informativos, los ejemplos más acabados de este sistema son Estados Unidos y las democracias industria-

les de Occidente. México se encuentra en un punto intermedio: su sistema informativo no es tan cerrado como los totalitarios, pero dista mucho de ser el propio de una sociedad abierta y democrática.

La responsabilidad de informar bien y con oportunidad, no es sólo del gobierno, sino también de los medios masivos de difusión. En sistemas abiertos, frente a la inevitable tendencia gubernamental de ocultar y distorsionar, está la agresividad y profesionalismo de la prensa, la televisión, la radio y las casas editoriales, para obtener información y elaborar interpretaciones independientes. Los reportajes de investigación, el Watergate, son elementos indispensables de un sistema político democrático y moderno.

En México, la televisión simplemente no ha mostrado nunca voluntad de independencia frente al poder. En materia política, la televisión mexicana se encuentra más cercana al modelo soviético de desinformación que al plural y democrático. En general, la prensa y la radio tienen mayor capacidad de acción independiente, pero no siempre tienen voluntad de ejercerla; por ello los lectores y escuchas guardan para esas partes de la desconfianza que se tiene frente a la verdad oficial.

Las razones de la desconfianza frente a la información oficial, se pueden ilustrar con ejemplos recientes. El 22 de abril del año pasado ocurrió la terrible explosión de Guadalajara. Oficialmente las construcciones destruidas fueron medio millar, los heridos 400 y los muertos 210, pero se duda de la veracidad de esta última cifra. La explosión se debió a la gran concentración de hidrocarburos en las tuberías del drenaje. Pero ¿cómo fue posible que fueran a parar ahí esos productos y en esas cantidades?

Tras la explosión, y por decisión presidencial, el gobernador de Jalisco perdió su puesto y el alcalde de Guadalajara fue a dar a la cárcel junto con siete funcionarios de Pemex. Sin embargo, para fin de año todos estaban en libertad. Hoy aún está faltando una explicación clara y creíble de las causas de la catástrofe y, por tanto, de las responsabilidades institucionales. El dinero público ha reconstruido parte de lo destruido en la capital de Jalisco, pero más como concesión que como obligación, pues si no hay responsables concretos, tampoco hay obligaciones concretas.

Andrés Caso Lombardo ya no es secretario de Comunicaciones y Transportes, ni tampoco embajador en Londres, como se supuso que sería. El ex secretario es hoy un simple y común ciudadano, pero que tiene un problema que no es tan simple y común: la demanda que puso en su contra Kaveh Mousavi en Inglaterra. La raíz del problema, como se sabe, está en la denuncia pública que hizo Mousavi cuando, como representante de la IBM en una licitación para la instalación de un moderno equipo de radar y control de la navegación aérea, personas que dijeron ser funcionarios públicos,

le pidieron una suma millonaria para otorgar el contrato a su compañía. Como Mousavi dice que rechazó la oferta, la IBM perdió el contrato.

Ante la acusación, la Secretaría de la Contraloría respondió de inmediato e informó que tras investigar no encontró nada indebido en la forma como la SCT había otorgado el contrato en cuestión. Sin embargo, cuando el primero de junio, legisladores del PAN y del PRD pidieron copia de la documentación sobre el caso a la Comisión de Vigilancia de la Contraloría Mayor de Hacienda, ésta se les negó. La explicación dada a los diputados de oposición —y por esa vía, a la opinión pública— es, según los legisladores priistas Jorge Mejía y Juan Antonio Nemi, la necesidad de mantener la información no en secreto, pero sí de usarla con discreción. En opinión de Cuauhtémoc López Sánchez, otro legislador priista, la información todavía se está compilando. Gonzalo Altamirano, del PAN, se pregunta, y con sobrada razón, ¿cómo fue posible que si aún se está recabando la información, la Contraloría ya haya llegado a la conclusión de que no hubo nada inconveniente en la forma como fue resuelta la famosa licitación?

De la situación en Chiapas sólo sabemos unas cuantas cosas, y todas preocupantes. Desde el 25 de mayo, el diario *La Jornada*, informó del desarrollo de una operación militar de gran envergadura en la región de Altamirano y Ocosingo, en Chiapas. Con información recabada entre varios testigos directos e indirectos, se pudo saber que los efectivos que participaron en la operación fueron, por lo menos, mil, posiblemente más, que en ella intervinieron helicópteros y vehículos blindados, y que quizá se efectuó un bombardeo aéreo. Igualmente se sabe que la acción afectó a las comunidades indígenas de los ejidos de Venustiano Carranza, Morelia, el Chichón, La Garrucha y Pataté Viejo. Ante la aparición de las noticias, el último día de mayo, se publicó un breve boletín del jefe de la oficina de prensa de la Secretaría de la Defensa. En él se dice que el 22 de mayo personal del 83º Batallón de Infantería, con sede en San Cristóbal de las Casas, se encontraba en prácticas en la región cuando fue atacado por un grupo que "presumiblemente realizaba actividades ilegales"; un joven subterráneo fue muerto, así como uno de los agresores. En un segundo ataque, el ejército sufrió otra baja fatal. La tropa hizo 10 prisioneros, dos de los cuales eran guatemaltecos y el resto indígenas.

El escueto comunicado de Sedena no es el ideal de información de una sociedad abierta, e inevitablemente da pie a más preguntas de las que contesta. Para el escritor Carlos Montemayor —que estaba en San Cristóbal cuando ocurrieron los enfrentamientos—, las armas decomisadas —básicamente rifles 22 y escopetas 410— no permiten pensar que ha surgido la guerrilla en México. Montemayor ofrece una explicación alternativa: las acciones de los

ganaderos del lugar y de Pemex, han llevado a los indígenas a defender sus tierras usando la poca fuerza a su disposición. ¿Es ese el caso?, se necesitan más datos y mejores explicaciones.

Finalmente, está el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas, el segundo miembro más importante de la jerarquía católica mexicana. A estas alturas, el lector ya debe estar al tanto de la versión oficial presentada por televisión por la Procuraduría General de la República el 1º de junio: la muerte del cardenal no fue premeditada sino el desafortunado resultado de una confusión generada durante un breve tiroteo —20 a 25 segundos— entre dos bandas rivales de narcotraficantes, y que tuvo lugar en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara justo cuando llegaba el automóvil del religioso. La versión oficial tiene cierta coherencia interna, pero tiene fallas. La principal, que no única, es que al cardenal le dispararon desde una distancia tan corta, que es difícil de imaginar una confusión de identidades.

La versión de la PGR es, pues, una de las explicaciones posibles y, desde luego, una de las más convenientes, pues descarta la posibilidad de un atentado contra el cardenal. Sin embargo, incluso esa explicación conlleva un precio alto para el gobierno y sin que por ello logre la credibilidad deseada. El precio es evidente; para hacer creíble su versión, la PGR debió de admitir que el 24 de mayo "todo estaba preparado para una pequeña guerra" en el aeropuerto de Guadalajara. Si los narcotraficantes han llegado al grado de librar abiertamente sus batallas en aeropuertos internacionales, es decir, en zonas particularmente concurridas por las clases medias y altas, y de responsabilidad del Gobierno Federal, qué no harán en otras circunstancias. Tras la explicación de la PGR está la admisión de que el narcotráfico le ha perdido el respeto al gobierno y al resto de la sociedad. Quiere decir, también, que un grupo ilegal puede tomar el control total de sitios tan neurálgicos como los aeropuertos, al punto de hacer que un vuelo de Aeroméxico espere por 20 minutos a los integrantes de un comando de narcotraficantes, y que, posteriormente, sin mayor molestia los deposite en Tijuana. La fuerza del Estado debería de dirigirse menos al desarme de indígenas en Chiapas, y más a la recuperación del control de puntos realmente neurálgicos, como aeropuertos, caminos... y las calles de las ciudades.

Se dice que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), está considerando seriamente la posibilidad de admitir a México como el nuevo miembro de ese exclusivo grupo de países desarrollados y modernos. Desafortunadamente con o sin membresía en la OECD, hechos como los anteriores muestran que aún nos falta mucho para llegar a ser modernos, y lo sabemos. En materia de información política y credibilidad seguimos magníficamente instalados en el Tercer Mundo.